

Las relaciones sociedad- Estado y el paradigma de la inseguridad*

Juan S. Pegoraro

Instituto Gino Germani, Universidad de
Buenos Aires.

Introducción

La contrarrevolución neo-conservadora que desde los primeros años de 1980 se ha extendido en el mundo, ha producido y produce efectos muy profundos en diversos ámbitos de la vida social y en particular en la relación Estado-sociedad. Para ello ha ido socavando o destruyendo algunos de los pilares fundamentales en los que se apoyaba aquella relación y ha producido además novedosas formas de control social que tratan de asegurar la continuidad y reproducción del modelo.

Casi inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, la relación sociedad-Estado en los países occidentales se articuló de manera que significara una respuesta más satisfactoria a los ciudadanos que la que proporcionaba el modelo socio-político de los países "socialistas" al que paulatinamente se endemoniaba en el marco de la "Guerra fría".

En ese período (casi anormal del capitalismo, los años dorados le llama Eric

* Este trabajo es parte de una investigación que cuenta con subsidio de UBACyT (Res. C.S. 006).

Hobsbawn),¹ el Modelo Fordista y el Estado de Bienestar se articularon en un particular régimen de acumulación en el que el aumento de la producción global se derramó en parte hacia sectores subalternos.

Dice Hobsbawn, que “no fue hasta que se hubo acabado el gran boom, durante los turbulentos años setenta, a la espera de los traumáticos ochenta, cuando los observadores -principalmente para empezar los economistas- empezaron a darse cuenta de que el mundo, y en especial el mundo capitalista desarrollado, había atravesado una etapa histórica realmente excepcional, acaso única”.

También en ciertos aspectos de la vida cotidiana se desarrolló un “liberalismo” un tanto radical que fue posible a partir de la situación de opulencia en los países de capitalismo desarrollado, en especial en E.E.U.U.; esto fue socavando algunos de los aspectos represivos y conservadores de la vida social privada, y se fue produciendo una cierta legitimación de la diversidad, lo distinto, lo diferente. Importantes movimientos por los derechos civiles ocuparon la escena política y fueron los actores sociales ejemplares en tal período y gestaron la ampliación de esos derechos.

Recordemos que la forma Estado mantenida durante esos 30 -singulares- años se basaba en una mayor inclusión de personas bajo un paraguas de seguridad social, y así incluía de manera sustantiva, principalmente la vivienda,

el trabajo, la salud, la educación y la justicia. Como dice Niklas Luhman,²

“si es posible hablar de una lógica del Estado de Bienestar ésa sólo puede ser comprendida mediante el principio de compensación. Se trata de la compensación de aquellas desventajas que recaen sobre cada cual como consecuencia de un determinado sistema de vida”.

Por lo tanto, esa lógica implicaba la idea de que todas las desigualdades individuales y las inseguridades consecuentes, ya sea provocada por acontecimientos naturales o por la estructura social, debía ser compensada y por lo tanto implicaba como proyecto un horizonte infinito de ayudas colectivas sin modificar el régimen de acumulación.

La relación sociedad-Estado se desarrollaba en el marco del “paradigma de la seguridad”³ que regía el proyecto de construcción de una sociedad basada en la filosofía política del Welfare State. La idea de seguridad como programa político estatal no es nuevo y Pierre Rosenvallon por ejemplo, se remite a Hobbes cuando éste habla del *Estado como reductor de incertidumbres* y sostiene:

2. N. Luhmann, *Teoría Política en el Estado de Bienestar*, Madrid, Alianza Universidad, 1994.

3. Al respecto, ver de Pierre Rosenvallon, *La nueva cuestión social* (Buenos Aires, Manantiales, 1995) en el que hace un recorrido histórico sobre el concepto de seguridad social ligado a las políticas estatales para la reducción de incertidumbres y un diagnóstico sobre los nuevos desafíos del progreso social. También Claus Offe, “Un diseño no productivista para las políticas sociales”, en *Contra la exclusión. La propuesta del ingreso ciudadano*, Barcelona, Miño y Davila Editores, 1995.

1. E. Hobsbawn, *Historia del Siglo XX*, (en especial el capítulo IX. Crítica Gijalbo Mondadori), Barcelona, 1995. La cita a continuación pertenece a la página 260.

“El desarrollo del Estado Benefactor casi había llegado a vencer la antigua inseguridad social y eliminar el temor al mañana”.

Una de las primeras consecuencias de la contrarrevolución neo conservadora, fue la reestructuración de la “forma Estado” y su relación con la sociedad (quiero decir con el orden social), y por lo tanto un cambio sustancial del modelo de Welfare State.

Justamente es sobre sus límites cómo el capitalismo, en la forma reformista que constituye la especificidad del siglo XX, en un instante de resplandor, se ha descubierto como imposible, dice Toni Negri en Fin de Siglo.⁴

“Y así lo que se va articulando como proyecto de modelo de la contrarrevolución neo-conservadora a partir de fines de los '70 es un nuevo paradigma que rige, en paralelo, al modelo de sociedad neoliberal de mercado: el ‘paradigma de la inseguridad’. No me refiero con esto a una propuesta que haga inteligible esta nueva política desde un marco conspirativo, -aunque ciertos acuerdos sectoriales y de intereses así lo sugieran- sino desde, una algo más que sospecha de que se trata de problemas más estructurales de tal modelo⁵ tal como sugiriera Bobbio en su riguroso análisis de la democracia y el “Estado paralelo”, al margen de la voluntad de atenuar sus efec-

tos por parte de algunos de sus gestores.

Al mismo tiempo, y como es fácil suponer, este cambio implica nuevos mecanismos de control social⁶ que deben ser consecuentes con tal relación entre capital y trabajo; es en la estrategia de naturalizar las nuevas formas de esa relación, que se van construyendo las bases ideológicas para la siempre anhelada e invocada (y nunca alcanzada) paz social.

En tal sentido es bueno señalar que las fantasías organicistas y consensuales no dejan de reactivarse y reaparecen sin pudor en el discurso político neoconservador de la mano “invisible del mercado” no obstante que los datos de la realidad se encargan de mostrar, empecinadamente indicadores sociales de desigualdad, inequidad, inseguridad, exclusión.

Es cierto que este modelo neo-conservador es un fenómeno mundial que se ha extendido desde los países centrales a todo el mundo dominado por el capital y su lógica de reproducción ampliada; pero en cada país la aplicación del nuevo modelo de orden social responde a características estructurales, culturales, históricas, geográficas y conforme a su modo de inserción en la división internacional del trabajo.⁷

4. T. Negri, *Fin de siglo*, Barcelona, Paidós/ICE-UAB, 1992.

5. N. Bobbio, “Las promesas incumplidas de la democracia”, en *¿Qué socialismo?*, Barcelona, Plaza y Janes, 1980. Aquí Bobbio se refiere a la existencia de un Estado paralelo gestado por intereses privados.

6. El concepto de “control social” no es utilizado de la misma manera en la teoría social, pero lo entiendo como “las estrategias tendientes a naturalizar y normalizar un determinado orden social construido por las fuerzas sociales dominantes”, en Juan S. Pegoraro, *Teoría Social Control Social y Seguridad: el nuevo escenario de los años '90*, Cuadernos de Posgrado N°3, Fac. Cs. Sociales-UBA, 1995.

7. N. Chomsky y H. Dieterich, *La Sociedad Global. Educación, Mercado y Democracia*, México, Contrapunto, 1996.

Por lo tanto los efectos sociales de este "paradigma de la inseguridad" son cualitativamente distintos en los países desarrollados y en los países de capitalismo más atrasado como los de América Latina; en éstos, grandes masas de población nunca fueron integradas totalmente al mercado y a los beneficios de las redes de contención, asistencia y compensación tal como existieron, y en gran medida todavía existen en aquellos; a punto tal que mientras en Europa se habla de la sociedad de los "dos tercios", en América Latina en particular se puede sostener que se trata de sociedades de "un tercio".

Los aspectos particulares del paradigma de la inseguridad

De manera exploratoria se pueden identificar los mecanismos más importantes con los cuales se reproduce el orden social en esta década en el marco de los grandes cambios que se han producido en casi todas las sociedades occidentales: cambios en el proceso de trabajo, cambios en la forma de la socialización, cambios en la representación y mediación política, cambios en la organización de la vida familiar, cambios en la política penal.

Es en este marco que en América Latina, y en Argentina en particular a partir de principios de los '90. se privatizan y mercantilizan actividades públicas y estatales que tenían una larga historia de prácticas solidarias y equitativas. De esta manera se ha ido invirtiendo aquel paradigma de la seguridad, derivando en esta región, en una catástrata de limitaciones y reducciones de la presencia estatal y la mercantilización

de relaciones sociales anteriormente basadas en el servicio y la solidaridad y que ahora tales mercantilizaciones se extienden a importantes aspectos de la vida social cotidiana.

La aplicación del modelo en particular en Argentina, necesitó del impulso que significó el golpe de Estado de los grandes grupos económicos por medio de la hiperinflación que desataron en 1989 y los saqueos a supermercados, que fundó y "legitimó" una cierta *excepcionalidad* que marcó el inicio de un nuevo período político y sobre el que acordaron los dos partidos mayoritarios, el Peronismo y el Radicalismo.

A partir de ese momento se produce un gran cambio en la economía con la estabilidad de la moneda, logrado según se sostenía con un ajuste y desregulación de actividades económicas, la privatización y por lo tanto la mercantilización de servicios sociales. La amenaza de la desestabilización del modelo económico y de la catástrofe social como su consecuencia natural se la conjuró con un discurso sobre la eficiencia, el mercado, la competitividad de nuestros productos, la globalización de la economía, los réditos de la privatización de empresas estatales, que producirían un crecimiento del bienestar material de la población.

Tal discurso descansa en "la ciencia económica" y convoca a coincidir con un criterio productivista y por lo tanto eficiente y contable. Con esto apunta a una estrategia en diversos órdenes de la vida social, creando una inseguridad creciente como la menor atención pública a la salud, una escasa política de vivienda que no evita la exclusión, una disminución en el sostenimiento la educación pública y una anulación o re-

ducción drástica de los derechos laborales; y además, el empobrecimiento de más de dos tercios de la sociedad.

En tal sentido las técnicas de poder muy ligadas a los mecanismos de control social, actúan formando parte de un conjunto, de una estrategia general que se expresa en gran medida, en diversos organismos del Estado y en especial en el sistema penal. Pero no es éste, el Estado, el creador y generador del control social sino el ejecutor del mismo, un espacio donde se canalizan las relaciones sociales.

Es ésta la idea que desarrolla Darío Melossi⁸ cuando sostiene que:

“en el estudio del control social no se puede tratar al ‘Estado’ como una variable independiente... nosotros ya no nos podemos imaginar al Estado como el autor del control. Lo que sucede, en cambio, es que el Estado actual es el Estado del control social”.

No otra cosa, un siglo y medio atrás proponía Marx:⁹

“Solamente la superstición política puede imaginarse todavía en nuestros días que la vida burguesa debe ser mantenida en cohesión por el Estado, cuando en la realidad ocurre al revés, que es el Estado quien se halla mantenido en cohesión por la vida burguesa.”

8. D. Melossi, *El Estado del Control Social*, México, Siglo XXI, 1992, p. 231.

9. K. Marx, *La Sagrada Familia*, México, J. Grijalbo, 1967, p. 87.

El Control Social en acción

Es cierto que la economía de mercado no es un descubrimiento actual y en realidad desde hace muchos años Argentina ha adoptado el modelo de producción capitalista, basado necesariamente en el mercado pero lo novedoso de estos últimos años es la extensión de la relación costo-beneficio y su “mercantilización” hacia actividades públicas o privadas que estaban guiadas por otro tipo de normas entre ellas y principalmente la salud, la vivienda, el trabajo, la justicia, la educación y la seguridad social.

Su impacto en la vida familiar

Los efectos en la vida cotidiana de esta contrarrevolución neo-conservadora afectan también los lazos familiares a punto tal que se va constituyendo una sociedad sin familia ya que exige que todos los individuos deben ser “independientes” o sea estar a disposición de las exigencias del mercado, y velar por su existencia y reproducción.

Una referencia a esto es la contratación de los trabajadores en el marco de la precarización y flexibilización que le impone horarios de trabajo móvil -aunque respetando el total semanal-; y así el Capital conforme a sus requerimientos no considera al sábado o al domingo como semi o no laborales. La semana tiene 7 días y en ellos, conforme a las cambiantes exigencias del mercado, o una planificación en función de él se distribuye el horario. De tal manera cada trabajador contratado no sabe hasta un par de días antes el horario de trabajo, cuando vacacionará, y si va a te-

ner que trabajar o no el domingo; es fácilmente imaginable los efectos psicológicos que esto produce en la vida personal y familiar.

Su impacto sobre las Políticas Sociales

Por otra parte la Políticas sociales hacia lo sectores vulnerados, excluidos, se concentra en un asistencialismo de sobrevivencia en la inseguridad. Las Políticas Sociales no tienen como objetivo la capacitación de esos sectores para integrarlos al proceso productivo y a la sociedad en su conjunto, sino que sólo se subvenciona su mantenimiento y sobrevivencia en la exclusión, se los mantiene así como inválidos sociales. Se trata de una estrategia, que como dice Foucault, mantiene separada la población vulnerable y excluida de los trabajadores asalariados.

Además se utilizan los fondos de dinero destinados a las políticas sociales en asignaciones de sobrevivencia con la finalidad principal de constituir un "electorado cautivo" y clientelar que asegure la reelección o la circulación de los "funcionarios políticos" en los cargos estatales; cargos constituidos en verdaderas "presas".

El distrito electoral, casi definitorio por su extensión y concentración demográfica como es el Gran Buenos Aires, dispone de 700 millones de dólares anuales desde 1992 como "reparación histórica" para la lucha contra la pobreza. No obstante ello los datos del INDEC no registran mejoría alguna de tal situación.

Además hace dos años se ha puesto en marcha un plan de asistencia a ni-

ños y madres embarazadas con la entrega de leche, huevos y cereales que distribuyen 16.000 "manzaneras", que ha reclutado la esposa del gobernador y que dirige un organismo estatal. Estas "manzaneras" son mujeres que se encargan de repartir los alimentos citados en su domicilio que es donde lo descargan los camiones de la Gobernación. La significación en el plano electoral y en relación a la implementación de un "clientelismo político" ligado a las tareas de asistencia social que realizan las "manzaneras" es una preocupación en los ambientes políticos del conurbano bonaerense.

Otras bases "materiales"

La inseguridad social tiene bases reales, aunque ésta se exprese con síntomas psicológicos. El identificar la nueva situación con el paradigma de la inseguridad implica también identificar ciertas bases reales o materiales de tal paradigma para desligarse de cuestiones ideológicas o psicológicas aunque se expresen con tales síntomas.

Por ejemplo el nivel de endeudamiento personal alcanzó en 1994 a más de 15.000 millones de dólares. Por ej. en abril de 1995, los créditos hipotecarios ascendían a 3.743 millones de dólares, los créditos prendarios a 3.077 millones, y los créditos personales a 2.280 millones. Además las compras financiadas de electrodomésticos en el año 1993 a 640 millones, y los autoplanes para la compra de automóviles en el mismo año 1993 a más de 6.000 millones. Esto parece ser la ejemplificación empírica

de "el hombre endeudado"¹⁰ al que se refería Gilles Deleuze como una nueva subjetividad, endeudamiento que condiciona la mayoría de comportamientos sociales y entre ellos los comportamientos políticos.

Este proceso de endeudamiento implica un complejo proceso de cooptación que ha involucrado también a cuadros intelectuales anteriormente comprometidos con las luchas sociales y políticas para cargos en la administración pública por la vía de contratos temporales, y con renovaciones que si bien implican inseguridad también los impulsa al endeudamiento.

Por otra parte la aplicación del modelo a nuestro país tiene otro elemento característico importante y para tener en cuenta: se trata del modelo de tributación que en el caso es absolutamente regresivo: los impuestos indirectos (los menos equitativos) representan el 50% de recaudación fiscal total, y los impuestos directos sólo el 15% (al capital y a los bienes privados). Como dato comparativo, en Australia estos impuestos directos representan el 66%, en EE.UU. el 57,6 y en España el 32,2. Otro dato que podemos aportar para la

evaluación de ello es que en Argentina la presión tributaria de los impuestos directos representan el 2,7% como porcentaje del PBI mientras que en Australia el 19,9, en EE.UU. el 16,3 y en España el 10,9.¹¹

A esto se debe sumar la deuda pública que alcanza a unos 90.000 millones de dólares habiendo aumentado 15.000 millones en estos últimos dos años. Las implicancias de esta *realidad endeudada* y su articulación en el marco del paradigma de la inseguridad crea, por supuesto, mas interrogantes que certezas.

Su impacto en el mercado de trabajo

El mercado de trabajo ha sido profundamente afectado produciendo un desempleo abierto de más del 18% de la PEA y otro 24% de subempleo, lo que en número significa que más de seis millones de personas están buscando trabajo.

No debe obviarse en esta descripción de indicadores de la "inseguridad" un fenómeno que es consecuencia de la flexibilización y precarización del empleo: el aumento del número de los trabajadores con contrato por tiempo fijo, o a prueba, o sea sin estabilidad, y por añadidura el trabajo en negro, o sea no registrado y por lo tanto sin cobertura social alguna.

Es esta situación nueva la que le hace decir a Robert Castel,

"el problema mas grave no es tal vez el de la desocupación. No lo digo para

10. G. Deleuze, "El hombre ya no es el hombre encerrado, sino el hombre endeudado. Es cierto que el capitalismo ha guardado como constante la extrema miseria de tres cuartas partes de la humanidad: demasiados pobres para la deuda, demasiados numerosos para el encierro; el control no sólo tendrá que enfrentarse con la disposición de las fronteras sino también con las explosiones de villas miserias y ghettos", en *Conversaciones*, Valencia, Pre-textos, 1994. Los datos han sido tomados de "Cash", Suplemento Económico de *Página/12*, presentados por Alfredo Zaiat y Pablo Ferreira.

11. Instituto de Estudios Fiscales y Económicos. en "Cash", Suplemento económico de *Página/12*.

quitar dramatismo a la situación de los tres millones de desocupados, sino para invitar a mirar por encima del desempleo, la degradación de las condiciones de trabajo."¹²

Es Pierre Rosenvallon el que nos advierte de la necesidad de descartar lo obvio y lo naturalizado cuando nos dice que

"La exclusión es el resultado de un proceso y no un estado social dado, no hay que olvidarlo".

En la realidad, éste es uno de los objetivos del orden social actual, la construcción de una subjetividad en la que el asalariado esté además, *agradecido*. La cancelación de la memoria y por lo tanto del proceso histórico que ha ido constituyendo esta cabeza, es uno de los logros del control social. El capitalismo industrial en el siglo pasado, como dice Foucault se preocupaba por el disciplinamiento, o sea por su naturalización, por su normalización. Ese capitalismo industrial buscaba, con diversas herramientas de control social crear una *cabeza de obrero, una cabeza de no propietario*.

Es en el marco de esta estrategia, de esta amenaza que vive el orden social que se puede ir entendiendo la inversión del paradigma del Welfare y la presencia del nuevo paradigma de la inseguridad; la estrategia pasa por tratar de construir una nueva subjetividad, un nuevo sujeto, *el asalariado agradecido*.

Su impacto en la atención de la salud

Otro aspecto digno de resaltar es que junto con el desarrollo de la privatización de la salud, se produce el desfinanciamiento de los hospitales públicos y el desabastecimiento de los medicamentos que necesitan personas de escasos recursos, en particular drogas oncológicas y para el tratamiento del SIDA/HIV. El presupuesto previsto para el año '97 teniendo en cuenta que los enfermos de SIDA se duplicarían, se mantiene como el de 1996.

Y en relación a la desregulación de las políticas de salud¹³ en referencia a las obras sociales, la competencia y el mercado regirán y condicionarán la atención a los pacientes, y con ello la aparición de mecanismos de "discriminación de riesgos" que les faciliten a las entidades privadas prestatarias omitir y rechazar encubiertamente a los sectores de mayor riesgo y por lo tanto con menos réditos para ellas, como son los pacientes crónicos, los enfermos neuropsiquiátricos.

Las desigualdades sociales, una redistribución del ingreso más inequitativa, el desempleo, el subempleo, los cambios en la familia, las nuevas formas del consumo, la caducidad de las instituciones mediadoras, la pérdida de la movilidad social, etc. permiten aproximarnos a un diagnóstico acerca

12. Citado por Pierre Rosenvallon, *op. cit.*, p. 86.

13. Ver O. Cetrángolo, M. Damill, J. Katz, L. Lerner y S. Ramos, *Desregulación y Salud. Un análisis de la reforma del sistema de Obras Sociales*, Documento de trabajo N° 3, Buenos Aires, Instituto para el Desarrollo Industrial, 1992.

de una sociedad, un orden social que crea inseguridad y que pretende neutralizar los reclamos que genera por medio del control social. *Se trata de un control social que produce y mantiene la inseguridad.* Esta parece ser la exitosa estrategia para desarticular o limitar la agregación de demandas sociales en un proyecto político alternativo.

Ya no se trata de las ideas rectoras de un Estado bondadoso "terapéutico" u orientado a lo público. Es la *mercantilización* de sus actividades lo que lo integra hacia sí mismo, y por ello "la clase política" le es leal y funcional. Por ello la lógica electoral atraviesa transversalmente a la gran mayoría de los miembros de los partidos políticos ligados a la función pública.

Claro que hace falta también una base material para la cooptación, y quizás puede identificarse a esta especial conjunción de factores cuyo resultado es éste; entre ellos la indefensión, la dependencia, la precarización, la inseguridad, la pérdida de la autonomía, que conforman una estructura, un orden social, de la que ellos son dependientes, y en alguna medida ayudan a reproducir.

Todo esto se cierra con la política penal, que resumidamente enumeramos como ejemplos de que produce, reproduce y asegura la inseguridad

1) La existencia de una campaña de alarma social sostenida en el aumento de los delitos "comunes" que requiere más policías, más jueces, más cárceles y más leyes penalizadoras y más exigencias para la excarcelación, o para bene-

ficiarse con la libertad condicional o la "probation". Esta ecuación, esta inflación del sistema penal en su conjunto corre paralelo con los crecientes niveles de exclusión y marginación social de la población y la alarma amplifica la inseguridad.

En tal sentido puede hablarse de una doble victimización ya que por un lado se los constituye en pobres con el modelo económico-social y paralelamente se los persigue y encarcela por delitos de menor cuantía en comparación con los grandes delitos que "dañan" la economía de la sociedad. El origen social de la mayoría de los presos por delitos contra la propiedad da cuenta a las claras de la selectividad social-penal utilizada. El delito de "acto" cede lugar al delito del "actor" que se expresa en esa penalización que mantiene en la sombra y al resguardo la delincuencia de los poderosos.

Una consecuencia es el sobrepoblamiento carcelario, que alcanza a más del 60% de su capacidad de alojamiento, lo que ha implicado motines sumamente sangrientos y sórdidos; la respuesta ha sido proyectar construcciones de otras cárceles y alguna de máxima seguridad.

2) Una declarada guerra contra la delincuencia callejera y/o de delincuentes comunes con un considerable aumento del presupuesto policial destinado al equipamiento de la policía fortaleciendo su capacidad represiva (armas, helicópteros, ametralladoras, y itakas, patrulleros y camionetas todo camino). Esta declarada guerra en los hechos es siempre ambivalente por el involucramiento de fuerzas policiales en bandas de asaltantes así como su

participación en otros "negocios" delictuales.

3) Una política de aniquilamiento de supuestos delincuentes con la proliferación de ejecuciones que fue llamada del "gatillo fácil". En los últimos tres años un promedio de más de 150 presuntos delincuentes muertos y unos 110 heridos en "enfrentamientos".¹⁴

Esto sugiere la existencia de hecho de la pena de muerte, sin defensa enjuicio, sin presunción de inocencia, sin sentencia.

4) Numerosas muertes de personas ajenas al hecho policial producidas por balaceras casi todas por balas policiales, ya que la guerra a la delincuencia somete a su lógica a la población civil que puede verse afectada y que en la realidad suman más de un centenar de muertos en los últimos ocho años.

5) La política de penas privativas a la libertad (de 1 a 30) días por infracción a edictos policiales¹⁵ dictadas por el Jefe de Policía (ebriedad, escándalo, vagancia, insultos etc.) que, sólo en la Capital Federal pasaron de 30.000 personas en el año 1987 a 106.000 en el '94 y a 160.000 en el '95. En las Provincias existe un sistema similar pero sin datos accesibles. Un sub-sistema penal, sin control y sin garantías legales.

6) Una profunda reorganización del Poder Judicial, en especial en el fuero

penal y el federal (que atiende los delitos de funcionarios públicos y parte de delitos de tráfico de drogas) por medio de la selección y reclutamiento de funcionarios a partir de 1983, con la mayoría en el Senado del Peronismo y luego del '89 con quórum y 2/3 propios. El aumento del número de los jueces de la Corte Suprema fue realizado para que dicho poder avale la política del ejecutivo, tal como lo acaba de reconocer explícitamente el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Eduardo Duhalde y candidato a la presidencia.

7) La política del Ejecutivo de nombrar funcionarios del sistema penal antes de que se constituya el Consejo de la Magistratura (creado por la reforma constitucional en 1994), y que aún sigue sin constituirse. La sensación de inseguridad que siente la población por parte de la justicia también se funda en una generalizada sospecha de que obedecen instrucciones del Poder Ejecutivo y en especial en los actos de corrupción en el que se ven involucrados hombres o cuadros del gobierno. Al respecto una encuesta del mes de octubre de 1995, muestra que sólo el 13% de la población confía en la justicia.

8) El crecimiento exponencial de las agencias privadas de seguridad, conformadas por integrantes o ex-integrantes de la FF.AA. y en ellas muchos de sus miembros han sido acusados por la violación del DD.HH. en la época del Terrorismo de Estado y conforman unos 120.000 hombres armados. Esta privatización y mercantilización de la seguridad involucra al gobierno a punto tal que el Ministerio del Interior (entre otros organismos esta-

14. "Informe 1995", Buenos Aires, Centro de Estudios Legales y Sociales, 1996.

15. Ver R. A. Gentili, *Análisis comparativo de estadísticas de edictos policiales*, Buenos Aires, CISALP, 1996.



“Señoritas en la chichería”, Cuzco, 1927.,
en Martín Chambi, *El Ojo Rasgado*.

tales) reconoció haber contratado una agencia de seguridad privada, propiedad del jefe de la guardia del Presidente Menem.

9) Los atentados y amenazas y presiones de diversa índole que sufren aquellos jueces y fiscales que entienden en causas donde están involucrados funcionarios públicos que nunca son esclarecidos (atentado a la Embajada de Israel que fue destruida por una bomba, atentado a la AMIA que fue volada por una bomba y cuyo resultado fueron casi cien muertos y trescientos heridos, lavado de dinero, aduana paralela, reintegro por exportaciones, el caso del oro, etc.) lo

que los lleva en muchos casos a desligarse de los procesos judiciales con diversas excusas y también por una política de ascensos y traslados ejecutada por el Ministerio de Justicia y la Corte Suprema.

10) La política de penalización de la tenencia y consumo de drogas es otro factor de inseguridad, un fantasma que atemoriza; produce efectos de profundas implicancias en los individuos “tocados” por el sistema penal en cuanto el Estado más demoniza la sustancia y utiliza tal amenaza como herramienta de control social. La penalización afecta más a la vida social que el propio consumo en cuanto

pretende atribuir a los castigos aplicados selectivamente, la capacidad de solucionar un problema y con él no hace más que asegurar que siga siendo un negocio altamente rentable.

A esto se agrega una campaña muy inquietante de "higiene social" mediante un vasto programa llamado "Formación de 10.000 líderes" para luchar contra la drogadicción.

Y el final que es un principio

De tal manera, la inseguridad se presenta como constitutiva de este modelo de ordenamiento social, y la localización de ella en diversos espacios de la vida social, y en especial en el miedo a la delincuencia, a una forma de delincuencia a la que se le atribuye esa cualidad de generar inseguridad social.

Como sostiene Claus Offe,¹⁶ existen cuatro opciones estratégicas que podrían adoptarse como respuesta a las incertidumbres e inseguridades y relacionadas con las premisas de esta nueva relación entre Estado y sociedad:

1) Los liberales económicos sostienen que las carencias materiales se solucionan en cuanto el mercado produzca un incremento de la productividad y con ello del ingreso per cápita.

2) La estrategia conservadora recomienda una política de castigos y recompensas selectivas a las actitudes de

la gente con respecto al trabajo, la salud, el orden legal y la familia...

3) La versión de la propuesta socialdemócrata que insiste sobre la necesidad y posibilidad de expandir aún más el Estado del Bienestar, necesario para activar la moral solidaria y universalista, como así también el compromiso político entre votantes y empleados.

4) Las propuestas de la Izquierda post industrialista, que puede ser descripta como Izquierda Libertaria, dice, en cuanto a su orientación ideológica que propone sostener la idea de ciudadanía con un ingreso básico e igualitario para todos que permita subsistir en seguridad.

Perry Anderson decía en una conferencia en Buenos Aires hace unos años que debemos aprender de la actitud de los Neo-Conservadores que en la década de los '50, en plena oleada de Welfare State no dejaron de criticar el intervencionismo estatal y las políticas de bienestar, hasta que en los '80 pudieron implementar sus ideas. Esa lucha contra el siempre ofrecido sentimiento de inevitabilidad.¹⁷ Pero, "todo lo sólido se desvanece" y en esta oleada de políticas neo-conservadoras y populistas y de modificaciones de las bases materiales, la descripción y el análisis crítico de sus resultados es el presupuesto para invertir esa tendencia. La luz del desencanto comienza a iluminar crecientemente un nuevo escenario en el final de este siglo en el que viejos fantasmas del pasado se van autoconvocando; es en suma el final de la

16. C. Offe, "Un diseño no productivista para las políticas sociales", en R. Lo Vuolo (comp.), *Contra la Exclusión. La propuesta del ingreso ciudadano*, Buenos Aires, Ciepp-Miño y Dávila Editores, 1995.

17. Ver al respecto, Barrington Moore Jr., *La injusticia: bases sociales de la obediencia y la rebelión*, en especial el Cap. 14, México, UNAM, 1989.

ilusión que el discurso del mercado produjo y reprodujo desde finales de los años '70. Pero el desencanto o la desilusión es una condición necesaria pero no suficiente. Hace falta la esperanza y para ello la voluntad de resistir y criticar, resistir desde una posición fundada en una ética de la solidaridad, y criticar desde un análisis de las formas materiales en las que se apoya el modelo neoconservador y populista.

En suma, las relaciones de la sociedad y el Estado no dejan de expresarse en su inestabilidad, conflicto y cambio, y sostenerse en modelos de anestesia cul-

tural y moral y en relaciones de dominación y sometimiento. La ilusión de descubrir y alcanzar un orden social legítimo en el marco de las relaciones sociales y económicas desiguales requiere de la resignación de una parte importante de la sociedad, de una resignación que crea en la inevitabilidad del sufrimiento. Por ello el desafío no es otro que sostener los patrones de condena hacia este modelo de orden social, en recuperar y sostener la certeza de que *todo lo sólido se desvanece*, y también la certeza de la idea de que existen las bases materiales para una sociedad más libre e igualitaria. ■

(Segunda época)

EL Rodaballo

Revista de política y cultura

Año 6 N.º 6/7 Otoño/Invierno 1997 \$8

De Lukács a Benjamin:
un diálogo con **Michael Löwy**

Toni Negri
El poder del Trabajo en los
Tiempos de la globalización

La narrativa utópica de Ursula K. Le Guin
Fredric Jameson/J. Brennan/M. Downs
y un cuento inédito de la autora de
Los desposeídos:
El día antes de la revolución

La izquierda argentina: historia y política
J. Carnadas/R. Pittaluga/H. Tarcus/G. Ro

B. de Santos, M. C. Labandeira, A. Oberto
Subjetividad, política, emancipación
(a propósito de E. Laclau)

Feminismo y política:
¿el fin del patriarcado?
Colectivo "Sottosopra"/Celia Amorós

Strafacce y Valente sobre **Soriano**/
La plaza vacía: Svampa-Martuccelli/
I. Muñoz sobre **las revistas culturales**/
Acha sobre el **José L. Romero** de Trimboli/
Grüner sobre **Rozitchner**/En torno al
Anti-Sábado de M. P. López y G. Korn